



POR LO COMPLEJO DEL SUR

*Apuntes sobre territorio, participación e
interculturalidad*

José Luis García | Stefano Sartorello | Cesar Rosas

COORDINADORES

Homero Castro | Azucena Damián | Marco Santana | Bianca Torres

Zenaido Ortiz | Omar Jiménez | Laura Moreno | Casandra Guajardo

Alejandra Javiel | Fidencio Hernández | Manuel Ocampo

ÍNDICE

PRÓLOGO

CAPÍTULO I 17

VIOLENCIA Y POBREZA EN GUERRERO: EL CASO DE LA POLICÍA COMUNITARIA

Azucena Damián Madero, Homero Castro Guzmán y Cesar Rosas Herrera.

CAPÍTULO II 43

AUTODEFENSAS EN EL ESTADO DE GUERRERO

Marco Antonio Santana Sandoval.

CAPÍTULO III 65

EDUCAR EN CONTEXTOS CRÍTICOS: POBREZA, DESIGUALDAD Y VIOLENCIA EN EL ESTADO DE GUERRERO

José Luis García García, Bianca Rocio Torres Hernández y Zenaido Ortiz Añorve.

CAPÍTULO IV 87

LA CORRUPCIÓN: UNA AMENAZA EN EL SURESTE MEXICANO

Omar David Jiménez Ortega.

CAPÍTULO V 115

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Laura Eloyna Moreno Nango.

CAPÍTULO VI 145

ESTEREOTIPOS, DISCRIMINACIÓN Y RACIALIZACIÓN; DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL EN ESCUELAS URBANAS

Stefano Claudio Sartorello, Casandra Guajardo Rodríguez y Alejandra Javiel Lomas.

CAPÍTULO VII

189

TEJIENDO PUENTES: DIÁLOGO PARA LA INTERCULTURALIDAD INTERCOMPENSIVA

Fidencio Hernández Hernández.

CAPÍTULO VIII

215

LA INTERCULTURALIDAD COMO METODOLOGÍA PARA ERRADICAR EL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO EN CHIAPAS

Manuel Gustavo Ocampo Muñoa.

III. EDUCAR EN CONTEXTOS CRÍTICOS: POBREZA, DESIGUALDAD Y VIOLENCIA EN EL ESTADO DE GUERRERO

José Luis García¹
Bianca Rocío Torres²
Zenaido Ortiz³

1. Introducción

Educar en Guerrero es un acto de fe; las patologías sociales presentes a lo largo y ancho del territorio, obstaculizan la educabilidad de las personas e impiden cristalizar los ideales de desarrollo presentes permanentemente en los discursos políticos, gubernamentales y empresariales. Desde la ejecución de la política neoliberal como modelo de desarrollo en México, durante los años 80's y 90's, se ha insistido de forma sistemática en una hipotética

¹ Posgraduado en políticas públicas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Interventor educativo, Universidad Pedagógica Nacional (UPN) sede Xalapa. Miembro del GT "Educación e Interculturalidad" del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Coordinador del Programa de Maestría en Docencia de las Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Guerrero, México. Correo electrónico: josegarcia@uagro.mx

² Comunicóloga, Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Maestra en Educación, Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID). Doctorante en Educación, Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado (CEVIP). Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

³ Antropólogo social y maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, El Colegio de Morelos (Colmor). Coordinador de Sistemas Normativos Internos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC).

correlación existente entre el nivel de consumo educativo de las personas y el desarrollo de la economía de los países.

La narrativa económica y política hegemónica en el país sostiene, desde hace más de 30 años, que es la educación la vía para que cualquier pueblo pueda abandonar su condición de atraso y posicionarse de cara al progreso y al desarrollo social. El tren hacia el mundo desarrollado pasa necesariamente por las aulas. Sin embargo, pensar en una educación de tales ambiciones y alcances, sin reflexionar acerca del contexto en el que se imparte, es destinarla al fracaso. Guerrero es, por decir lo menos, un territorio convulso y complejo; y su aparato educativo, kafkiano.

Todos los niveles gubernamentales en distintas épocas de la historia han fallado en el diagnóstico y han dado a la entidad recetas educativas prefabricadas y descontextualizadas; además ¿podría la educación aspirar a ser justa y democrática sin una sociedad justa y democrática? Es decir, la escuela es parte y reflejo de una estructura, una estructura compleja con aristas históricas, jurídicas, culturales, sociales, políticas o económicas; entender la magnitud de esa estructura es el primer paso hacia la comprensión del problema, y la ruta obligada para la construcción de mejores condiciones de educabilidad para los guerrerenses.

¿Cómo construir una educación digna para todas las personas en una entidad cuyo común denominador es el rezago? Rezago multifactorial caracterizado por cacicazgos históricos, una clase política impresentable, por los altos niveles de corrupción y pobreza, por políticas de Estado compensatorias y paternalistas y por un agravio permanente y doloroso hacia todos aquellos que no

figuran en la lista de pasajeros del avión con rumbo al mundo desarrollado.

El objetivo de este ensayo es analizar aquellas condiciones sociales que obstaculizan la educabilidad de las personas en Guerrero, desde una perspectiva transdisciplinar. Es necesaria la construcción de una ruta de análisis crítica y compleja desde las ciencias sociales y las humanidades, que permita entender al sistema educativo como una consecuencia (y no necesariamente una causa) de la desigualdad histórica que Guerrero ha padecido desde sus orígenes post independentistas.

2. Aproximación al concepto de educabilidad

El concepto de educabilidad presente en este ensayo, refiere a todos aquellos elementos contextuales que rodean la vida de las y los estudiantes y que impactan significativamente en el éxito o el fracaso escolar de los mismos. El concepto coadyuva en la construcción de una reflexión más amplia, acerca de las condiciones sociales mínimas o básicas necesarias, para hacer posible la inclusión plena de las personas a la educación formal.

Hablar de educabilidad es hacer énfasis en las desigualdades estructurales que se presentan entre los estudiantes, derivadas de sus condiciones socio contextuales; condiciones que se construyen a partir de la aplicación de determinados modelos económicos y sus respectivas políticas públicas. La educabilidad es una variable que crece o decrece a partir de elementos tales como la situación económica del país, la región o de la familia, la violencia del entorno, el nivel de escolaridad y la ocupación de los padres, etc.

La educabilidad “propone una mirada compleja que abarque educación, pobreza y desigualdad, para captar las múltiples formas en que el empobrecimiento y la exclusión inciden en las oportunidades educativas” (Bonal y Tarabini 2012). El concepto toma fuerza en la región gracias al texto: “Las condiciones de educabilidad de los niños y adolescentes en América Latina”, publicado en 2002 por el pedagogo Juan Carlos Tedesco y el sociólogo Néstor López.

La hipótesis central del trabajo antes citado, propone una visión complementaria a la narrativa hegemónica neoliberal que pone a la educación como vía hacia la equidad social. Tedesco y López sostienen en sentido inverso, que se requiere una renta básica de equidad social (condiciones sociales equitativas) para poder garantizar a la mayor cantidad de personas el acceso a los sistemas educativos formales.

En consecuencia, aquella visión que pone a la educación como condición necesaria para la equidad debe ser complementada con otra que, en sentido inverso, pone a la equidad como condición de posibilidad para la educación. Se hace necesario, por lo tanto, renunciar a modelos teóricos que se apoyan en relaciones causales unidireccionales, y abordar la articulación entre educación y equidad desde una perspectiva relacional que mantenga viva la tensión entre ambos términos. (Tedesco y López 2002, 7).

Lo que el concepto de educabilidad plantea, es trascender la visión de la escolarización didáctica-instrumental o meramente áulica y revalorizar el contexto como agente pedagógico potenciador u obstaculizador del proceso educativo; es una propuesta desde la sociología educativa útil y sobre todo, pertinente

en un contexto como el latinoamericano, en donde el común denominador entre países sigue siendo la desigualdad social.

El término educabilidad nos brinda entonces la posibilidad de contextualizar el acto educativo, de darle una forma y un marco específico a dicho proceso con el fin de analizar sus aristas de forma más profunda, efectiva y sistemática. Lo que implicaría diseñar e implementar políticas públicas a la medida de las complejidades, para dejar de recurrir a las fórmulas educativas prefabricadas que surgen en países con una cultura educativa más desarrollada, pero que son inconexas con nuestros entornos y necesidades específicas.

3. Educar en pobreza, reproducir la desigualdad: perspectiva económica-estructural

El bloque capitalista anunciaba, con la caída del Muro de Berlín en 1989, que llevaría sus valores e ideología a más lugares del mundo. América Latina se preparaba para acoger un nuevo proyecto económico que prometía la generación de riquezas de forma equitativa y por ende la disminución de las brechas sociales a través de una economía libre que se posicionaba como la antítesis del modelo de Estado Benefactor. “El neoliberalismo comprende como características principales el libre mercado, eliminar el gasto público por los servicios sociales, desregulación, privatización, eliminación del concepto de bien público o comunidad”. (Vargas 2007).

A más de 30 años del impulso de la política neoliberal a través del Consenso de Washington existen datos que confirman, efectivamente, el aumento de la riqueza, pero no la distribución equitativa de la misma. De acuerdo con el informe “Tiempo para el

cuidado” elaborado por OXFAM (2020), en Latinoamérica y el Caribe, el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. Mientras que, en el caso específico de México, el estudio “Global Wealth Report” elaborado por Credit Suisse Group (2014) sostiene que el 10% más rico del país concentra más del 60% del total de la riqueza.

La desigualdad social es un fenómeno arraigado y el principal obstáculo de la lucha contra la pobreza; el sistema económico actual ha sido construido por una élite para beneficiarse a sí misma, dejando sin certidumbres al resto de la población. Irónicamente, esto socava el crecimiento de la economía y es la génesis de patologías sociales como la violencia o la delincuencia en sus distintas modalidades. La pobreza es una condición estructural que incide en la descomposición del tejido social y en el paulatino deterioro de las relaciones humanas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que, en México, hacia 2018 existían más de 52 millones de personas en situación de pobreza lo que representa más del 40% de la población total y un aumento de más de 3 millones de personas pobres en relación con la medición realizada en 2008 por el mismo organismo. La disminución de las brechas sociales fue el gran pendiente en la agenda política y económica de los presidentes mexicanos de corte neoliberal, desde Miguel De la Madrid Hurtado (1982-1988) hasta Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Desde el punto de vista económico la pobreza se vincula de forma inexorable a los ingresos “la población es pobre porque no tiene algo que necesita, o cuando carece de los recursos para acceder

a las cosas que necesita” (Spicker 2009, 292). La Comisión Económica para América Latina (Cepal) señala que “La noción de pobreza expresa situaciones de carencia de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas sociales de referencia.” (2000, 83).

El Coneval (2018) reconoce al sureste mexicano como el mayor reto en materia de política de desarrollo social; es ahí donde se encuentran las entidades federativas con mayor porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, Chiapas con un 76.4%, Oaxaca con un 66.4%, Veracruz con un 61.8% y Guerrero con un 66.5%. Estas cifras impactan negativamente en indicadores relacionados con el acceso a los servicios de salud, seguridad social, alimentación, vivienda y por supuesto, educación.

Guerrero es entonces, la segunda entidad con más pobreza en el país; como dato adicional el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su censo de 2010 catalogó a Cochoapa el Grande (una escisión de Metlatónoc) como el municipio más pobre del país, con un grado de marginación, índice de desarrollo humano y rezago similares al de países africanos subdesarrollados. La misma situación fue reportada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) en 2008 y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2005.

Es axiomático, la pobreza es una condición social y económica que obstaculiza la educabilidad de las personas; complejiza la ya de por si ardua tarea formativa, pues genera entre los estudiantes problemas que van desde la vinculación socioafectiva con sus compañeros y profesores, hasta problemas

nutricionales severos que le impiden atender los requerimientos educativos básicos. El Informe “Terce” elaborado por la UNESCO señala que “la persistencia de elevados niveles de inequidad y pobreza [...], continúa ofreciendo dificultades adicionales a la expansión de una educación de calidad en la mayor parte de la región” (Flotts et al. 2013, 3).

La pobreza es aquella variable que más incide negativamente en el logro educativo de los estudiantes, 7 de cada 10 guerrerenses lo son y esto impacta profundamente en el grado promedio de escolaridad de la población, por ejemplo, según cifras de 2015 del INEGI, las personas de 15 años y más en Guerrero solo cuentan con 7.8 años de educación formal, lo que equivale a poco más del primer año de secundaria cuando la media nacional es de 9.2 años.

El problema se acentúa conforme avanza el nivel educativo; de cada 100 personas 50.4 tienen la educación básica terminada, 19.6 concluyeron la educación media superior y sólo 12.9 concluyeron el ciclo de formación de la educación superior; 13.2 no cuentan con ningún grado de escolaridad. La entidad sureña tiene acceso restringido a la educación formal y “esta condición perenne de escaso desarrollo educativo es causa y consecuencia permanente del bajo nivel de vida promedio de la mayoría de los guerrerenses” (Morales 2018, 24).

Según el documento “Derechos Humanos y pobreza en Guerrero” elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2018) en la entidad hay 2 millones 430 mil personas que carecen de ingreso suficiente para adquirir lo elemental para sobrevivir, esta cifra se dimensiona negativamente

considerando que en ese mismo estudio se indica que la población total es de 3 millones 533 mil habitantes. Además, hay 1 millón 265 mil personas en “pobreza extrema por ingresos”. Esto es con ingreso insuficiente para cubrir la canasta alimentaria, lo que representa más de un tercio de la población (35%).

Es claro que la reproducción de las desigualdades sociales es anterior a la escuela, no afirmamos que la escuela sea la causa de estas desigualdades, pero si una consecuencia lógica; la educación es el resultado de un modelo de sociedad en crisis en donde se aprecia una profunda ausencia de los más esenciales valores de los seres humanos para la vida en comunión. La escuela promueve una igualdad a todas luces artificial, inútil ante las extensas brechas sociales que experimentan las personas y que se acentúan durante la trayectoria académica.

El punto de vista tradicional de la instrucción y el aprendizaje en el salón de clase, como un proceso neutral antiséptico y aislado de los conceptos de poder, política, historia y contexto, ya no puede ser sostenido con verosimilitud. De hecho, los investigadores críticos han dado primacía a lo social, lo cultural, lo político y lo económico para comprender mejor la forma en que trabaja la escuela contemporánea”. (McLaren 2005, 256).

La escuela responde a intereses específicos que plantean el acto educativo como un medio para la reproducción del *statu quo*. Quien domina los medios de producción material, dominará, invariablemente, los medios de producción intelectual. La escuela clasifica y para ello, se basa en el estrato social de cada persona, seguido de variables como la “capacidad”, el “rendimiento escolar” o las “habilidades físicas” entonces; hay individuos que por

diversas condiciones sociales inician la carrera educativa con evidente desventaja, sin embargo:

La ideología escolar tiende a presentar a la escuela como un fenómeno único, igual para todos, y que no establece más distinciones que las que se deducen de los méritos y la capacidad de cada uno. El objetivo de la escuela es único y una sola es su organización. Según la pretensión de la ideología escolar, la escuela unifica a todos los que la frecuentan en el seno de una cultura común que anulan las diferencias ligadas al origen familiar o profesional diverso”. (Palacios 1999, 451).

La escuela debe ser analizada como una estructura atravesada por procesos económicos, políticos, históricos y socioculturales. El discurso que la coloca como camino necesario hacia el desarrollo de los pueblos, no puede sostenerse en un contexto de profundas desigualdades; pensar en la transformación de la escuela es pensar en una profunda reforma social que permita la creación de comunidades con una renta básica de igualdad, que posibilite a todas las personas hacer efectivo su derecho a una educación gratuita y de calidad.

4. Enseñar en contextos críticos: inseguridad y educación en Guerrero.

La pobreza mina las relaciones humanas. Obliga al hombre a la subsistencia pragmática, aquella que implica seguir de forma precaria la dinámica social vertiginosa que ha impuesto el modelo económico actual. La pobreza acuña esquemas cognitivos y prácticos que no son conscientes ni intencionales, ya que se adquieren a través de los valores y visiones que se encuentran inmersos en la dinámica social de cada individuo. Ser pobre es un acto que se aprende y se interioriza.

Para los que piensan que los pobres no tienen cultura, el concepto de una cultura de la pobreza puede parecer una contradicción. En el uso antropológico el término cultura supone, esencialmente, un patrón de vida que pasa de generación en generación. Al aplicar este concepto de cultura a la comprensión de la pobreza, quiero atraer la atención hacia el hecho de que la pobreza en las naciones modernas no es sólo un estado de privación económica, de desorganización, o de ausencia de algo. Es también algo positivo en el sentido de que tiene una estructura, una disposición razonada y mecanismos de defensa sin los, cuales los pobres difícilmente podrían seguir adelante. (Lewis 1965, 10-11).

En un país en donde se estima existen más de 52.4 millones de personas en situación de pobreza (Coneval, 2018), es fácil deducir que los problemas sociales están a la orden del día. Uno de ellos, el más lacerante de los últimos 15 años, derivado de la precariedad económica que persiste en la entidad, es el de la inseguridad. El sexenio del político conservador Felipe Calderón (2006-2012), fue el detonante de un problema escondido bajo la alfombra de la política mexicana, desde los años 60's y que había dado fuertes señales de alerta durante el sexenio neoliberal del priista Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

La disputa territorial que emprendieron todos los capos de la droga en México derivó en una guerra atroz que nos ha enseñado a capa abierta las peores miserias de la especie humana. Cientos de miles de personas brutalmente asesinadas, secuestradas, desaparecidas, armadas en autodefensa, desplazadas o amenazadas y millones de familias desintegradas, es el saldo parcial de una guerra que a más de 14 años de haber iniciado formalmente, aún no tiene fecha de caducidad y Guerrero, al ser una entidad con pobreza

arraigada, tierra fértil para la siembra de amapola y paso estratégico para el trasiego de droga, ha vivido este fenómeno con muchas particularidades desde el sexenio del perredista Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011).

Con más de 3.5 millones de habitantes, Guerrero se ha convertido sistemáticamente en el invitado de honor de todos los rankings nacionales e internacionales relacionados con pobreza, inequidad y marginación social; fluctúa permanentemente entre las primeras tres posiciones disputando el lugar con sus vecinos del suroeste Chiapas y Oaxaca. Y, como consecuencia lógica, se ha posicionado como punto neurálgico para las actividades de grupos delincuenciales que se aprovechan de la ausencia de movilidad social, lo que ha derivado en una escalada de violencia otrora inimaginable.

En 2014, Guerrero reportaba una tasa de homicidios de 49 por cada 100,000 habitantes, triplicando el promedio nacional de 16 por cada 100,000, según el estudio “Justicia Fallida en el Estado de Guerrero” elaborado por Open Society Foundations (2014). Las ciudades más importantes de la entidad, Acapulco (principal centro turístico) y Chilpancingo (la capital) se colocan al frente de las ciudades más violentas de México; la primera con una tasa de homicidios de 70 por cada 100,000 habitantes y la segunda con 63 por cada 100,000.

Los casos de ambas ciudades están ampliamente visibilizados por ser el centro económico y político de la entidad. Sin embargo, Guerrero cuenta con otros focos rojos en donde la violencia se ha enraizado tales como Iguala, Chilapa, Zihuatanejo, Leonardo Bravo, Tlacotepec, Zumpango, Zirandaro, entre otros.

Prácticamente no hay rincón en la entidad donde el fenómeno de la violencia derivada de la inseguridad no se haya hecho presente, de hecho, informes oficiales señalan la presencia de 18 grupos delictivos disputando el control territorial y el mercado de la droga en Guerrero.

Estas disputas han generado como daño colateral el desplazamiento de poblaciones enteras que buscan el resguardo de su seguridad por parte del Estado, quien se ha visto rebasado a la hora de garantizar derechos sociales básicos. Los desplazados huyen del acoso constante de grupos delictivos y de los enfrentamientos, en donde también participan los grupos de autodefensa, algunos de ellos, hombres y mujeres organizados para el autocuidado y otros tantos que fungen como brazo armado de los cárteles de la droga.

La expansión de la inseguridad en Guerrero ha modificado la dinámica social; el habitante local se sabe en peligro, pero ha desarrollado altos niveles de adaptación al fenómeno, así como insensibilidad y desinterés. Pero ignorar el síntoma no hace que la enfermedad desaparezca, al contrario, se corre el riesgo de que se agrave y que otros órganos se infecten y así ha ocurrido. Lo que inició como una disputa territorial, terminó en la descomposición total de todas las estructuras sociales, una de ellas, muy importante para el discurso hegemónico neoliberal: la educación.

Celso Castro (2020), periodista del Sol de México reporta que “En Guerrero los incidentes de violencia que se han documentado por parte de los padres de familia a partir de 2006 a la fecha son alarmantes y revelan que en ese lapso 86 maestros y 175 alumnos fueron asesinados, así como dos mil 777 docentes y ocho

mil 823 alumnos han sido víctimas de delitos diversos”. La suspensión de clases en todos los niveles educativos, contratación de servicios de seguridad privada, el adelanto de periodos vacacionales o incluso el cierre definitivo de algunos centros, son medidas que las instituciones educativas han tomado para evitar que sus miembros sean víctimas de la delincuencia.

La extorsión de los grupos criminales tiene márgenes muy amplios, desde el más modesto trabajador educativo hasta el más alto funcionario gubernamental o universitario, es un problema generalizado. En un contexto con estas particularidades educar parece más un acto de estoicismo ¿cómo garantizar una educación digna a los niños y jóvenes de Guerrero que viven, por un lado, bajo la angustia de la pobreza y por otro, bajo el yugo de la inseguridad? ¿Cómo garantizar a los profesores y a los trabajadores educativos integridad física y psicológica ante los escenarios de violencia que viven a diario?

El estudio “La educación obligatoria en México, informe 2017” elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) sostiene que “En cuanto a características del contexto sociocultural, es frecuente que los docentes señalen en sus comunidades problemas sociales que afectan a los estudiantes y sus familias e influyen negativamente sobre el aprovechamiento de los alumnos, tales como el alcoholismo, la drogadicción, el narcomenudeo, el narcotráfico, el pandillerismo, los robos y la inseguridad” (INEE 2017, 122).

La inseguridad, es uno de los problemas sociales incrustados en el entorno de los actores educativos guerrerenses en todos los niveles y las respuestas por parte de los 3 órdenes de gobierno

parecen insuficientes; más elementos policiacos y militares, más patrullajes, mayor presencia de los cuerpos de seguridad en los planteles, más y mejor armamento no parecen estar inhibiendo el fenómeno. El binomio inseguridad-educación parece encontrar en un contexto de pobreza el caldo de cultivo ideal para su reproducción.

Hay dos casos mediáticos que por su naturaleza definen claramente ese vínculo (inseguridad-educación): el primero de ellos, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa” en la ciudad de Iguala un 26 de septiembre de 2014, quienes fueron entregados por agentes policiacos municipales a miembros del cártel “Guerreros Unidos”, una escisión del cartel de los Beltrán Leyva que operaba en la zona norte de la entidad y al que pertenecía el entonces alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.

En México, aunque nunca se vivió la experiencia de un golpe de Estado militar, las violaciones graves como la desaparición forzada, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes se han transformado en un modus operandi que no se ha limitado a la actuación aislada de funcionarios, sino a un fenómeno de carácter generalizado y operado por los cuerpos de las instituciones de seguridad, grupos paramilitares y organizaciones criminales. (Gravante 2018).

De los estudiantes poco se sabe, a casi 6 años de su desaparición la investigación parece estancada. Las lecciones que nos deja una de las mayores tragedias de la historia de México son varias: la complicidad y subordinación del Estado y sus aparatos

represivos con el crimen organizado, la capacidad del narcotráfico para infiltrar partidos políticos e imponer candidatos para distintas responsabilidades públicas, la incapacidad de los órganos electorales para detectar anomalías de esas magnitudes y la insensibilidad de una clase política impresentable ante un asunto de este tamaño.

El segundo caso, es el que protagonizaron en enero de 2020, 19 niños de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, a 50 kilómetros de Chilpancingo, la capital del estado. La escena es impresentable e indignante; menores que van desde los 6 hasta los 15 años armados, marchando y vestidos con uniformes de la policía comunitaria, para defender su territorio de la organización criminal conocida como “Los Ardillos”, que días antes había perpetrado un ataque en donde fueron torturados y asesinados 10 personas de la comunidad. “Los Ardillos” disputan desde hace más de 10 años el control de las rutas de trasiego de droga en la zona Centro y Montaña, y Chilapa es punto neurálgico de esta actividad por su posición geográfica.

A partir de la segunda mitad de 2000, los grupos del narcotráfico diversificaron sus actividades para mantener sus márgenes de ganancias frente a la merma ocasionada por la “guerra contra el narcotráfico”. Fue así como emergieron, de manera preponderante, la extorsión, la explotación ilegal de minerales (particularmente hierro), la tala clandestina (maderas preciosas) y la importación ilegal de artículos chinos. La modalidad de extorsión fue la que se experimentó con mayor agravio, rompiendo un antiguo equilibrio del poder local entre los grupos de narcotráfico y las comunidades; se trastocaron así los intereses establecidos a lo largo de los años a través de relaciones de

convivencia e interés mutuo. En la ruptura de este equilibrio de poder local, cobró sentido el surgimiento de los grupos de defensa comunitaria en sus dos expresiones regionales: “policía comunitaria” y “grupo de autodefensa”. (Fuentes 2017).

La precarización de las condiciones de vida ha empujado a muchos guerrerenses a la búsqueda de nuevas oportunidades económicas; durante décadas fue la migración hacia los Estados Unidos el alivio de muchas familias, sin embargo, desde inicios del siglo XX es el narcotráfico, en sus distintas modalidades y con todos sus riesgos, el que ofrece la posibilidad de la movilidad social ascendente. Un estado pobre con un Estado ausente, siempre será el lugar ideal para la reproducción de patologías sociales que laceran cualquier intento de vida en democracia.

5. Conclusiones

En un contexto con alta incidencia delictiva, altos índices de violencia y profundas brechas de desigualdad social, cualquier discurso político-educativo parece una profunda entelequia. La narrativa hegemónica capitalista sostiene que con educación los pueblos serán capaces de salir de su condición de atraso, sin embargo, los matices contextuales que hacen vida en Guerrero nos obligan a preguntarnos si ¿la educación por sí misma tiene la fuerza necesaria para revertir el profundo rezago histórico que carga a costas la entidad?

No negamos la importancia de educar, pero reivindicamos la necesidad de pensar al sistema educativo como parte de una estructura más amplia, una estructura inequitativa construida por una élite social, que ha encontrado en la escuela el punto neurálgico

para la reproducción de sus privilegios y sus valores. Para configurar una educación justa e incluyente, debemos pensar en una sociedad justa e incluyente y Guerrero no lo es; las condiciones de educabilidad en la entidad impiden, a menos a corto y mediano plazo, pensar en una mejor educación para las y los guerrerenses.

La educación en la provincia se encuentra entonces atravesada, invariablemente, por el modelo económico hegemónico; el capitalismo no nivela las asimetrías sociales, las acentúa en aras de la reproducción de un sistema estructural y funcionalista que requiere de la desigualdad para seguir operando. Los desniveles existentes en términos de la posesión de los medios de producción y la distribución de la riqueza tendrían que ser el punto neurálgico de cualquier discusión para el bienestar no solo en términos educativos, sino sociales.

Se debe migrar de una concepción de política de Estado compensatoria y paternalista a una concepción de política pública integral que permita detonar los niveles de bienestar entre los habitantes de la provincia para incidir positivamente en los niveles de educabilidad. La escuela en sí misma, es un detonante económico que, vinculada inteligentemente con el sector social y productivo puede ser una herramienta de crecimiento importante en términos macros y micros.

Lamentablemente el aparato educativo guerrerense no suele ser más que un apetecible botín para grupos políticos sin claridad conceptual, metodológica, heurística o axiológica de lo que implica educar desde sus dimensiones sociales, políticas, culturales, económicas, históricas y pedagógicas. De continuar así, Guerrero se condenará a una educación descafeinada desconectada de lo social

y conectada a la competencia en un contexto en donde lo que menos hay es igualdad de condiciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Antonio Fuentes y Guillermo Paleta. 2015. Violencia y autodefensas comunitarias en Michoacán, México. *Iconos, Revista de Ciencias Sociales*, 171-186, núm. 53, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50941149009>. (Consultado el 30 de junio de 2020).
- Bonal, Xavier y Aina Tarabi. 2012. La educabilidad: educación, pobreza y desigualdad. *Cuadernos de Pedagogía*, 16-21, núm. 425, <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/307510> (Consultado el 14 de mayo de 2020).
- Castro, Celso. 25 de enero de 2020. Alarman índices de violencia en escuelas de Guerrero. El Sol de México (consultado en <https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/alarman-indices-de-violencia-en-escuelas-de-guerrero-4747159.html> 20 de junio de 2020).
- CEPAL. 2000. Equidad, desarrollo y ciudadanía, Naciones Unidas-Comisión Económica para América Latina. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Coffey, Clare et al. 2020. Tiempo para el cuidado: el trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad. OXFAM Internacional.

- CONEVAL. 2018. Medición de la pobreza 2008-2018. México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
- Credit Suisse Group. 2014. Global Wealth Report. Zurich: CS Research Institute.
- Flotts, Paulina et al. 2015. Informe de resultados TERCE: tercer estudio regional comparativo y explicativo. Chile: Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación-UNESCO.
- Gravante, Tommaso. 2018. Desaparición forzada y trauma cultural en México: el movimiento de Ayotzinapa. *Convergencia, Revista de Ciencias Sociales*, 13-28, núm. 77, <https://doi.org/10.29101/crcs.v25i77.9728>. (Consultado el 23 de agosto de 2020).
- INEE. 2017. La educación obligatoria en México. Informe 2017. México: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
- INEGI. 2015. Encuesta intercensal. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- José Tedesco y Néstor López. 2002. Las condiciones de educabilidad de los niños y adolescentes en América Latina. Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación-UNESCO.
- Lewis, O. 1965. Los hijos de Sánchez, 8ª edición. México: Editorial Joaquín Mortiz, S. A.

- McLaren, Peter. 2005. *La vida en las escuelas: una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la educación*. México: Editorial Siglo XXI.
- Morales, Marco Antonio. 2018. *La educación en el estado de Guerrero: el huevo de la serpiente*. México: Ediciones Eón.
- Open Society Foundations. 2015. *Justicia Fallida en el Estado de Guerrero*, New York: OPF.
- Palacios, Jesús. 1999. *La cuestión escolar*. 4ª Edición. México: Editorial Fontamara.
- Spicker, Paul. 2009. “Definiciones de pobreza: doce grupos de significados”. En *Pobreza: un glosario internacional*, Coords. Sonia Leguizamón, Paul Spicker y David Gordon, 291-306. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
- Vargas, J. 2007. Liberalismo, Neoliberalismo, Postneoliberalismo. *Revista Mad*. Revista del Magister en Análisis Sistemico Aplicado a la Sociedad, 66-89, núm.17, http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/17/vargas_04.pdf. (Consultado el 14 de noviembre de 2020).



La visión occidental del mundo impuesta como dogma, es insuficiente para comprender las nuevas y complejas dinámicas sociales cimentadas en la racionalidad capitalista, muchas de ellas concebidas como un atentado contra los principios básicos de la vida en democracia. El libro "Por lo complejo del sur: apuntes sobre territorio, participación e interculturalidad" es una provocación para la comprensión de las resistencias y tensiones territoriales, de la participación social, política educativa, y de los procesos de interculturalidad presentes en el sur de México, una región con marcadas asimetrías y acentuadas desigualdades. Los autores apuestan por los campos emergentes en la producción de conocimiento basados en un posicionamiento político, epistémico y pedagógico crítico a favor del reconocimiento de la diversidad sociocultural.



ISBN: 978-607-8755-35-6



9 786078 755356



Av. Javier Méndez Aponte No. 1
Fraccionamiento Servidor Agrario
C.P. 39070, Chilpancingo, Guerrero, México.
Tel. 747 471 93 10